

Panamá, 28 de agosto de 1996.

Su excelencia

CARLOS A. VALLARINO

Viceministro de Planificación
y Política Económica

E. S. D.

Señor Viceministro:

Me refiero a su Oficio No. DdCP/330 de 21 de agosto de 1996, relacionado con la solicitud de opinión legal de la Procuraduría de la Administración, respecto al Contrato a celebrarse entre el Instituto de Crédito Oficial de España y la República de Panamá, para financiar el 44.02% de la construcción y equipamiento del Hospital de Santiago de Veraguas, a ser ejecutado por el Ministerio de Salud, por un monto de US\$.9.816.956.50 (Nueve Millones Ochocientos Dieciséis Mil Novecientos Cincuenta y Seis Dólares de los Estados Unidos de América con 50/100), más el 50% de la prima de la Compañía Española de Seguro de Crédito al Exportador.

Concretamente se requiere dictamen, en cuanto a que el citado Contrato de Préstamo, ha sido autorizado de conformidad con las disposiciones que rigen esta materia en nuestro ordenamiento jurídico.

Al respecto, podemos manifestarle que, de conformidad con lo establecido en el artículo 195, numeral 3, de la Constitución Política de la República de Panamá, el Consejo de Gabinete tiene entre sus funciones: "Acordar la celebración de contratos..."; de lo cual se deduce que para la celebración de un Contrato de Préstamo, es menester que el mismo se someta a la consideración de dicho organismo estatal.

En tal sentido se observa que previa la celebración de este Contrato, fue expedido el Decreto de Gabinete No. 21 de 11 de julio de 1996. "Por el cual se autoriza el Contrato de Préstamo entre la República de Panamá y el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO) por la suma de US.9.816.956.50 (Nueve Millones Ochocientos Dieciséis Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 50/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Es indudable pues, que el Contrato de Préstamo cuenta con la autorización del Consejo de Gabinete, organismo éste que se encuentra investido

Constitucionalmente de plena autoridad para acordar la celebración de los mismos, tal y como lo estatuye el artículo 195 de nuestra Carta Fundamental.

Además, el Contrato de Préstamo aludido, recibió el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) en sesión celebrada el día 18 de junio de 1996, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 75 de 30 de mayo de 1990, modificado por el Decreto No. 32 de 10 de marzo de 1995, que requiere su opinión para la celebración de contratos cuya cuantía exceda la suma de QUINIENTOS MIL BALBOAS (B/.500,000.00). De igual forma, se autorizó al Ministro de Hacienda y Tesoro o en su defecto al Embajador de Panamá en España para que en nombre y representación del Estado, suscriban el Contrato de Préstamo antes citado.

Estimamos en consecuencia, que tanto por la naturaleza del contrato, incluyendo su contenido, como por las autoridades que en representación de la República de Panamá, participarán en su firma y negociación, genera en nuestro país derechos y obligaciones para el cumplimiento y ejecución del Contrato aludido anteriormente. La opinión antes vertida, tiene su fundamento jurídico en los siguientes instrumentos legales.

- a. Texto del Proyecto de Contrato de Préstamo.
- b. Decreto de Gabinete No. 21 de 11 de julio de 1996, por el cual se autoriza la celebración y firma del Contrato de Préstamo antes aludido.
- c. Nota No. CENA-216 de 24 de junio de 1996, mediante la cual el Consejo Económico Nacional emitió concepto favorable al Proyecto de Contrato de Préstamo enunciado.

Del análisis de cada uno de los documentos antes identificados, concluimos señalando que las autorizaciones plasmadas en este Proyecto de Contrato, en el que la República de Panamá se identifica como "Acreditado", y la Contraparte como "Banco", es jurídicamente válido, ya que ha tenido la participación de los funcionarios y organismos con capacidad legal para comprometer y negociar en nombre de la República de Panamá. Por lo tanto, genera derechos y obligaciones que emanan del mismo, y en consecuencia merece la opinión favorable de la Procuraduría de la Administración.

Del señor Viceministro, atentamente,

Licda. Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración.

MdeF/13/cch